

INTERNACIONAL

La Constitución de Mohamed VI logra un apoyo masivo

El 98% de los votantes respalda las reformas del rey de Marruecos

IGNACIO CEMBRERO
Rabat

El rey de Marruecos pidió hace dos semanas un "sí" masivo a la nueva Constitución y los marroquíes se lo dieron ayer en el referéndum. La participación superó la registrada en cualquiera de las elecciones de los 12 años de reinado de Mohamed VI y las papeletas de aprobación a la Carta Magna fueron abrumadoramente mayoritarias.

El 72,65% de los 13,1 millones de marroquíes inscritos en el censo —entre siete y ocho millones de adultos no figuran en él— votaron o, según indican los medios oficiales, cumplieron con el "deber nacional" empezando por el propio soberano alauí. Y el 98,49% dijeron sí. Mohamed VI votó, por primera vez desde su entronización, en un colegio del acomodado barrio rabatí de Souissi acompañado por su hermano el príncipe Moulay Rachid.

El no a la Ley fundamental tan solo fue del 1,51%, según el ministro del Interior, Taieb Charkaoui. El dato no sorprende porque ninguna fuerza política defendía esa opción, mientras que los jóvenes del Movimiento 20 de febrero, pequeños partidos de izquierdas y una gran corriente islamista preconizaban el boicoteo de las urnas. Charkaoui aseguró que pudieron hacer campaña "con total libertad". Cuando el ministro tomó la palabra aún faltaba un 6% de los sufragios por escrutarse.

La nueva Ley fundamental,

que sustituirá a aprobada en 1996 durante el reinado de Hassan II, transfiere algunos de los poderes del rey al jefe del Gobierno, pero el monarca conserva buena parte de sus prerrogativas. Sigue siendo el Comendador de los Creyentes, el jefe máximo de las Fuerzas Armadas, preside el órgano que regula la Justicia, nombra a los magistrados y puede destituir a los ministros tras consultar con el jefe del Ejecutivo.

Para lograr esa afluencia, el Ministerio del Interior no ahorró esfuerzos. Sentada, bajo un sol de plomo, en la puerta del Liceo Averroes, en el barrio de Yacoub el Mansour, Fatima, una septuagenaria, explica que vino a votar porque se lo pidió el *mokadem* [agente del Ministerio del Interior que tiene a su cargo una barriada]. "Pero ahora resulta que no puedo hacerlo", se lamenta, "porque no aparece mi tarjeta de elector", un documento requerido junto con el carnet de identidad. A su lado, Amina, también septuagenaria, asegura mientras se abanica para mitigar el calor sofocante, que acude a votar a *Sidi Destour* (Señor Constitución). "Me han dicho que vale la pena darle nuestro apoyo", añade convencida de que es una persona de carne y hueso antes de entrar en la cabina para introducir en el sobre una papeleta.

Ahmed Mansour, joven gerente de una pequeña empresa, insiste, en cambio, en la puerta del colegio Aoubakr Saadik, en



El rey Mohamed VI se dirige a depositar su voto, ayer en un colegio electoral de Rabat. /ADBELJALIL BOUNHAR (AP)

"Voto porque es un paso adelante; hay que probar si sale bien", dice un joven

Los contestatarios del Movimiento 20 de Febrero dieron la espalda a las urnas

el barrio de Mabella, que ha "leído dos veces la Constitución". "Por primera vez en mi vida, voy a votar", revela. "Lo hago porque es un paso adelante, porque contiene más aspectos positivos que negativos y porque hay que probar si sale bien".

Mucho más convencido estaba el veterano líder socialista Mohamed el Yazghi, que es ministro de Estado. "Esta Constitución es

la culminación de nuestra lucha de más de 30 años por la democracia", afirmó sonriente a la salida del colegio Karrakchou. ¿No instaura un sistema aún alejado de las monarquías parlamentarias europeas?, le pregunta el periodista. "No vamos a imitar como simios otros modelos", responde. "Tenemos nuestra historia, nuestras especificidades".

El Ministerio del Interior ha controlado, sin interferencias, el desarrollo del referéndum, motivo por el cual los jóvenes contestatarios del Movimiento 20 de Febrero boicotean las urnas en vez de apostar por el no. Sus funcionarios o, si escasean, los del Ministerio de Educación, presiden las mesas de los colegios electorales en las que hay además tres representantes de los ciudadanos designados por los *mokadem*.

El presidente de la mesa 89 del colegio Imán Chafi, de Douar Haja, una barriada paupérrima, reconoce sin tapujos que dos de

los tres representantes sentados junto a él "son analfabetos" y por eso carecen de la lista de electores. Son incapaces de leer los nombres de aquellos que han votado y poner al lado una cruz. Tampoco tomaron parte en el escrutinio, que empezó a las siete de la tarde, las ocho de la tarde en la Península.

Para ayudar a los analfabetos a votar las papeletas son de color diferente, el sí es blanco y el no es azul. Nadie hace ostentación del voto. Todos los electores a los que este corresponsal vio depositar su sufragio en la urna cogieron dos papeletas y entraron en la cabina para introducir una en el sobre. "Cobramos 600 dirhams extras por presidir una mesa", precisa Abdalá, funcionario del Gobierno Civil en el colegio Achbal el Fath de Temara, una ciudad pegada a Rabat. "Los representantes de los ciudadanos cobran 100 menos", señala, "y a todos nos traen desayuno y comida".

Túnez, 2º acto

SAMI
NAÏR



Una vez barrido el poder mafioso de Ben Ali, la unión de las fuerzas sociales que han intervenido en el curso de la revolución tunecina se agrieta progresivamente. Es normal. En todo proceso revolucionario, el periodo de transición es en realidad una batalla campal entre aquellos que quieren ir hasta el final del cambio y aquellos que para conservar las posiciones adquiridas quieren detenerse. Eso es lo que ocurre hoy en Túnez. El principal problema institucional afecta a la naturaleza del régimen político que se adoptará. No hay consenso sobre este punto. Las elecciones para la Constituyente, que tenían que celebrarse el 24 de julio, se han retrasado por esta razón. En la pugna que se ha iniciado entre el poder de la revolución representado por la Alta instancia, presidida por Yad Ben Achur y los principales partidos de la oposición, incluidos los islamistas, frente al Gobierno compuesto por miembros del antiguo régimen y por viejos militantes del par-

tido del Neo-Destur de la época de Bourguiba, es la legitimidad revolucionaria la que ha ganado: las elecciones han sido aplazadas hasta el 23 de octubre de 2011.

El argumento de los partidarios de elecciones inmediatas era que había que poner rápidamente término a la ausencia de legitimidad institucional del poder y al caos económico; el argumento de los representantes de la sociedad civil es que un país que nunca ha conocido la democracia no puede adoptar un modelo institucional a la carrera: al contrario, hay que iniciar un debate en la sociedad para elegir unas instituciones sólidas que sean realmente garantes de la irreversibilidad del proceso democrático. El Estado de derecho no debe construirse de espaldas a los ciudadanos. Ha prevalecido esta solución.

Más allá de esta divergencia hay dos puntos conflictivos que mortifican al campo político: la cuestión social y la secularidad del Estado. Esas dos cuestiones están relacionadas. La primera no puede ser resuelta sin la puesta en marcha de una gran política de desarrollo en la que el Estado debería tener un papel estratégico. Pero los círculos de negocios que han apoyado a la dictadura querían hoy una rápida reactivación de la actividad económica sin dar garantías sobre los derechos sociales de los asalariados. Defienden un liberalismo duro, mientras que la revolución es el

resultado de los desastres económicos y sociales provocados por las privatizaciones de la era Ben Ali y la corrupción que constituía el corazón del régimen. No quieren un Estado social, que les impondría una parte de los sacrificios que todo el mundo está dispuesto a hacer. La cuestión social divide, pues, cada vez más. Y los partidos salidos de la revolución cabalgan sobre ella en la competición política por las elecciones.

El sindicato UGTT tiene el papel de un casi-partido: es un elemento clave de la lucha por un Estado social. Se redime así de su connivencia pasada con la dictadura. Pero nada indica que logrará conservar su hegemonía sobre los asalariados. Puesto

El principal problema institucional afecta a la naturaleza del régimen político que se adoptará

que la economía tunecina está constituida en aproximadamente un 50% por el sector informal, los desempleados no sindicados son unos centenares de familias. La radicalidad religiosa está aquí al acecho. Los islamistas, que no han tenido papel alguno en la revolución, rivalizan en demagogia so-

cial para ganar legitimidad. Pueden seducir con sus propuestas extremas a una parte de la población, desorientada por la ausencia de cambio de su situación.

Segunda cuestión de fondo: la secularidad y las libertades individuales. Está en curso una batalla muy dura. Nadia el Fani, cineasta valiente, ha hecho una película significativamente titulada: *Ni Alá ni amo*. Ha proclamado en la televisión su ateísmo respetado para quienes piensan como ella. Los fanáticos islamistas la han villipendiado: ataques contra el cine que proyecta la película, amenazas de muerte contra la cineasta, actitud más que reservada del Gobierno en el apoyo a la libertad de conciencia. Por otro lado, los islamistas moderados del partido En Nahda acaban de abandonar la Alta instancia de la revolución, preparándose probablemente para pactar con los partidarios del antiguo régimen aún en el poder; a menos que se crean lo suficientemente fuertes como para separarse, ya, de una revolución secular que no es la suya. El mensaje es en todo caso claro para todos: el segundo acto de la revolución ha empezado. La batalla futura se convertirá inevitablemente en un enfrentamiento ideológico con los islamistas, que pretenden respetar la libertad de expresión, pero rechazan la secularidad del Estado. La revolución tunecina está lejos de haber acabado.